



Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa: Un nuevo actor en la reconstrucción

Por Eduardo Canteros *

Profesor Departamento de Trabajo Social UAH
Trabajador Social y Sociólogo PUC. Doctor (c) en Arquitectura y Estudios Urbanos PUC

“A fines de este año habremos entregado los 220 mil subsidios comprometidos, 100 mil soluciones habitacionales estarán terminadas y 80 mil más iniciadas. Antes del invierno del 2012, todas las familias que viven en aldeas habrán recibido sus viviendas definitivas o éstas estarán en notable estado de avance”. El anterior es un extracto de la cuenta anual realizada por el Presidente de la República el 21 de mayo recién pasado y se refiere específicamente a la reconstrucción postterremoto. Es un mensaje optimista, que pone el acento en acciones concretas y que promete dar por superado este problema el próximo año. Del otro lado de la vereda está el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ) que agrupa a cerca de 25 organizaciones ciudadanas activas desde el 27/F entre Santiago y Concepción. Al cumplirse un año del terremoto esta agrupación realizó protestas en las principales ciudades afectadas y entregó en La Moneda un petitorio que nacía de la disconformidad con que evalúan lo realizado por el Gobierno. Estas acciones querían evidenciar la ineficiencia de la autoridad, el incumplimiento de las promesas y la falta de participación de la ciudadanía afectada. En síntesis, insatisfacción por la reconstrucción planificada y materializada. ¿De dónde surge una evaluación tan radicalmente distinta a la del Gobierno? Algunos dirán que es por falta de información mientras que otros plantearán que es el tradicional juego político entre oficialismo y oposición. Sin embargo, el origen pareciera estar más bien en un cambio en la ciudadanía la cual se ha vuelto más activa, crítica, propositiva y técnicamente competente. Los miembros del MNRJ no solo buscan conocer lo realizado por el Gobierno,

sino que aspiran a participar, discutir y negociar cómo se define la reconstrucción y cuáles son las soluciones más apropiadas para cada una de las localidades. Tradicionalmente, este diálogo horizontal entre ciudadanía y Estado era inconcebible. La asimetría entre expertos gubernamentales y ciudadanos era evidente. En la actualidad esta situación ha cambiado un poco y el Estado ofrece nuevos canales de comunicación, sin embargo éstos muchas veces son evaluados como insatisfactorios e inconducentes. Entonces, ¿qué le queda hacer al Estado en este contexto? No resistirse a este cambio, sino verlo como una gran oportunidad. Esto implica apoyar el desarrollo de la ciudadanía a través del fomento y ampliación de fondos públicos para que estas agrupaciones puedan fortalecer su organización, obtener buenas asesorías y desarrollar de mejor forma sus estudios y propuestas. En muchas de las localidades afectadas por el terremoto la comunidad desea participar cuando se discuta qué y cómo reconstruir, e incluso quiere ser agente de la reconstrucción. Y en algunos casos como en el Barrio Yungay, a través de la Escuela Taller Fermín Vivaceta, se ha levantado una propuesta concreta para recuperar el barrio desde su identidad. El Estado tiene que tomar este conocimiento y compromiso ciudadano, y comenzar a reconocer que ha perdido poder en la definición y solución de los problemas sociales. En este nuevo contexto, qué mejor momento para diseñar dispositivos institucionales que reconozcan la capacidad de las organizaciones ciudadanas y les permitan fortalecerse aún más, generando una nueva alianza entre Estado y ciudadanía. ●